

Universidad en conflicto

Una bandera pirata en Bellaterra

José Gabriel Zato

El conflicto en la Universidad (que es la fuente del conflicto) se vertebra sobre tres cuestiones básicas: 1. Las misteriosas maquinaciones sobre los planes de estudio, 2. La baja calidad docente y 3. El lamentable olvido de los derechos laborales más elementales por parte del Ministerio.

En el punto señalado en primer término coexisten a su vez dos temas troncales (troncos en el argot castizo): la selectividad interciclos y la coherencia de las directrices generales que presumiblemente están saliendo de los grupos de trabajo para planes de estudio del Consejo de Universidades.

La selectividad interciclos, y en general, la exigencia de unas normas más flexibles y racionales de planificación de los estudios universitarios son puntos centrales que aparecen con nitidez en Bellaterra: supresión del límite de convocatorias, equiparación de los cursos nocturnos con los diurnos, gratuidad de certificados para prórrogas del servicio militar, al lado de cosas tan elementales como becas, servicios (desde autobuses hasta fotocopias), etcétera.

Desde luego que los voceros de la ideología oficial (don Juan Luis Cebrián y Cía.) se están encargando de ocultar a la opinión pública que la selectividad interciclos jugó su papel en los conflictos estudiantiles de los años sesenta-setenta, al igual que el entonces «plan nuevo de Medicina» y las reivindicaciones concretas y puntuales, que sólo pueden olvidar los que no estuvieron en los conflictos y presumen de haber estado en ellos.

Por supuesto cabe sospechar que de lo que se trata al caracterizar los nuevos movimientos estudiantiles de apolíticos, porque tienen reivindicaciones concretas, es sencillamente de dar una interpretación apolítica de los mismos en contraposición con las movilizaciones del 68, que, al parecer, eran fundamentalmente políticas y además dirigidas por el señor Maravall y unos amigos suyos.

Desgraciadamente para ellos el menosprecio de la historia no es garantía de futuro y la realidad actual es que estamos ante una colosal movida de carácter fundamentalmente político, de la que sólo emerge, como en los icebergs, una pequeña parte.

La otra vertiente de los planes de estudio, la coherencia, tiene a nuestros centros universitarios de humanidades «en un grito» y con razón. Se sabe por experiencia lo que estos «muchachos del Ministerio» entienden por libertad de elección cuando ellos dan las **directrices generales**. Cualquiera que haya participado en una comisión de estatutos sabe lo que se puede hacer «libremente» cuando el Ministerio da las pautas. El Ministerio entiende por autonomía el estricto ejercicio de la obediencia ciega. Las universidades ni fijan sus plantillas de profesores, ni el número de alumnos, ni las dotaciones para infraestructura, ni la dirección de sus departamentos, ni el número de horas lectivas máximo que pueden dar sus profesores, ni sus planes de estudio, ni tan siquiera el sistema

de formación de su personal docente. Sobre cualquier tema de relevancia el Ministerio da unas pautas tan estrictas como irracionales en la mayoría de los casos.

Y es sabido, desde hace tiempo, el escaso valor que el Ministerio concede a las enseñanzas de humanidades, tal vez porque, como decía Albareda, las enseñanzas tecnológicas superespecializadas llevan a la devoción, mientras que los estudios de humanidades, en su afán universalista, llevan con frecuencia al ateísmo.

El segundo punto del conflicto es la calidad docente. Este viejo tema sobre el que la OCDE ha vuelto a pronunciarse en diciembre del año 86 con los mismos consejos de siempre: 1. **aumentar el trabajo experimental** y 2. **que los profesores investiguen dentro o fuera de sus departamentos.**

Ese punto del conflicto ha movilizado durante este curso a estudiantes de numerosos centros universitarios (Informática de la Politécnica de Madrid, Ciencias de la Información de la Complutense, Ciencias de la Información de Bellaterra, etcétera) en los que se han reivindicado ordenadores, bibliotecas, laboratorios y, en general, instalaciones y equipos dignos. Es, en definitiva, un punto de prioridades presupuestarias para una enseñanza universitaria pública de calidad.

Junto al tema de instalaciones está también el de los recursos humanos y en eso vuelven las mentiras oficiales a ocultar la disminución real de profesores: los ayudantes (LRU) no son profesores según la citada ley, lo diga Cebrián, Maravall o ambos juntos. Y eso son más de 6.000 plazas de profesores universitarios en litigio y tiene mucho que ver con la calidad docente. Y el mayor cinismo imaginable es que contra la decisión de al menos cinco universidades de fijar explícitamente en sus estatutos en menos de 3 horas la posible docencia de sus ayudantes (siempre al servicio de su propia formación), la SEUI ha sacado un libelo en el que afirma que deberán dar hasta 8 horas, que pueden ser teóricas todas ellas. Y ello, además de ser de dudosa legalidad, es irracional, puesto que 8 horas es el máximo número de horas lectivas que se permite a los catedráticos.

En otra vertiente de la contratación están los profesores asociados, que de la noche a la mañana han dejado de ser profesionales de reconocido prestigio (que es lo que dice la LRU) para convertirse en pluriempleados que burlan las incompatibilidades, con la complicidad del Ministerio, y eso tiene también que ver con la calidad docente.

El tercero y último punto es el de los derechos laborales de los profesores actualmente contratados: la política de reconversión de los actuales PNN es impresentable. A ellos, a nosotros entonces, nos acusó un famoso editorial de «El País» titulado **una huelga miserable**, por oponernos hace cuatro años a la farsa de funcionarizaciones que estamos padeciendo, que el propio Maravall ha calificado vergonzantemente de endogámica.

Cinco años de negación de derechos laborales elementales, manteniendo, eso sí, salarios que harían sonrojar a cualquiera que no fuera un fanático convencido de que los gremialistas no son los funcionarios sino (sic) ¡los PNN!

La prórroga de contratos hasta el 92 y el fin de la farsa de ayudantes y asociados es la única salida digna de un Ministerio que ha perdido la dignidad.

Puede que para el señor Maravall el que los PNN o PNF sean más del 50 por 100 de las plantillas actuales de las universidades a escasos meses del septiembre 87 sea un hecho sin relevancia. Pero para las universidades es un hecho de enorme importancia y no sólo por razones laborales, que debieran ser importantes para un sindicalista, a menos que, antes de sindicalista, sea un censor preocupado por la pureza del pensamiento ajeno.

Como tal parece decantarse en sus declaraciones a «El País» del día 22 de febrero, en las que dice textualmente: «Para mí son muy distintas unas reivindicaciones de carácter gremialista corporativista, que no tienen en cuenta intereses de carácter general, de lo que son las reivindicaciones de lo que yo he llamado la puesta de largo de la primera generación de la democracia...».

No cabe duda de que todo autócrata quiera pautar la discrepancia, caso de no poder evitarla.

Es obvio que el importante rotativo «El País» es cuna y fuente de sabiduría infinita y que sus editoriales nos enseñan a **pensar como es debido** e incluso que los domingos (día del Señor) «El País» imaginario nos enseña a discrepar como es debido, esto es, una vez por semana y dentro del suplemento y al lado de otros inútiles pasatiempos.

En esa línea el inefable señor Maravall es terminante: **«La protesta estudiantil sólo ha provocado la aceleración del programa educativo del Gobierno»**. Esto es pensando **«como es debido»** estamos en **«el buen camino»** y, por tanto, lo único que cabe es acelerar la marcha.

Lo malo es que desde varios observatorios se empieza a pensar que no estamos en el buen camino y, por tanto, en lugar de acelerar la marcha hay que cambiar el rumbo que está demasiado escorado a la derecha.

El señor Maravall, ministro de Educación y punto (la Ciencia no es desde luego su preocupación), acaba de darnos una lección histórica, sabiendo escuchar las justas reivindicaciones puras, no gremialistas, planteadas como Dios manda, de los estudiantes de las enseñanzas medias, que según él mismo reconoce no tienen nada que ver con las reivindicaciones gremialistas corporativistas, etcétera, de los profesores no funcionarios de la universidad, por ejemplo.

Arrogantes, irrespetuosos, ineficientes y torpes, estos nuevos ricos de poder se ocupan como advenedizos de ser admitidos en las instancias de poder fáctico a espaldas del pueblo que los ha elegido.

Tienen ideas anticuadas acerca de casi todo y muy especialmente tienen una idea anticuada de la modernización. Para ellos nuestra dependencia tecnológica no es un especial problema y creen que su reforma universitaria es perfecta: poco importa que en el plazo fijado por la **lurru** (apodo popular de la LRU) para fijar las plantillas definitivas subsista más del 50 por 100 del profesorado fuera de las previsiones legales. Poco importa que su política universitaria esté encorsetando a las **universidades públicas** y definiendo en ellas un **futuro de baja calidad e incapaz de resolver las necesidades de la sociedad del futuro**. De nada sirve recordarles que están contrayendo una responsabilidad histórica con su miopía política presupuestaria que no contempla como prioridades las inversiones en enseñanza superior y en investigación.

Ellos saben que las clases acomodadas, a las que cada día mejor comprenden, ya han decidido, hace tiempo, buscar instituciones universitarias de prestigio en el extranjero para la formación de sus hijos a la espera de- que, tal vez de la mano de los socialistas, prosperen delegaciones de esas instituciones privadas en el suelo patrio.

Por ello es tan importante para el buen funcionamiento del «cotarro» el enseñarnos a pensar como es debido. Por ello alarma tanto al editorialista de «El País» la aparición de **una bandera pirata en Bellaterra**. Por ello algunos llaman Beirut universitario a lo que es una eclosión terminante en contra de tanta mendacidad y tanta torpeza. Porque el futuro depende, en definitiva, de que exista una interpretación de progreso a estos episodios de un conflicto universitario que, sobre todo, es una clara manifestación de repulsa «al

mañana estomagante escrito», que diría don Antonio Machado, que aparece cada vez con más nitidez en lo que los actuales gobernantes llaman política progresista para las universidades y los centros de investigación públicos.